



# Asamblea General

Distr. general  
14 de agosto de 2024  
Español  
Original: inglés

**Consejo de Derechos Humanos**  
**Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal**  
**47º período de sesiones**  
Ginebra, 4 a 15 de noviembre de 2024

## Dominica

### **Recopilación de información preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos**

#### **I. Antecedentes**

1. El presente informe se ha preparado de conformidad con las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos 5/1 y 16/21, teniendo en cuenta el resultado del examen anterior<sup>1</sup>. Constituye una recopilación de la información que figura en los documentos pertinentes de las Naciones Unidas, presentada en forma resumida debido a las restricciones relativas al número de palabras.

#### **II. Alcance de las obligaciones internacionales y cooperación con los mecanismos de derechos humanos**

2. El Comité de Derechos Humanos acogió con beneplácito la ratificación de varios instrumentos internacionales de derechos humanos o la adhesión a ellos por Dominica<sup>2</sup>. El equipo subregional de las Naciones Unidas para Barbados y la Organización de los Estados del Caribe Oriental señalaron que Dominica no había ratificado aún la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales<sup>3</sup>.

3. Si bien tomó nota de los esfuerzos de Dominica por hacer frente a la apatridia, el Comité de Derechos Humanos observó que no había ratificado la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas ni la Convención para Reducir los Casos de Apatridia<sup>4</sup>.

4. En marzo de 2020, y a falta de un informe inicial de Dominica, el mismo Comité examinó la situación de los derechos civiles y políticos en el país con arreglo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Comité lamentó que Dominica no hubiera cumplido su obligación de presentar informes en virtud del Pacto. A la luz del diálogo constructivo que el Comité había mantenido con la delegación de Dominica, el Comité consideró las respuestas escritas a la lista de cuestiones como informe inicial y le solicitó que presentara un documento básico común que facilitase el diálogo en el futuro<sup>5</sup>.

5. El equipo subregional de las Naciones Unidas observó que Dominica no había presentado informes a los órganos de tratados desde su adhesión, excepto su informe inicial al Comité de los Derechos del Niño en 2003<sup>6</sup>.



6. Aunque indicó que ningún titular de mandato de los procedimientos especiales había visitado aún el país, el equipo subregional de las Naciones Unidas señaló que Dominica había cursado una invitación a la Relatora Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático, quien había aceptado la invitación y solicitado fechas para una visita en el último trimestre de 2024. También señaló que, en 2019, la Relatora Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible había solicitado una visita<sup>7</sup>.

### III. Marco nacional de derechos humanos

#### Infraestructura institucional y medidas de política

7. El Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación por la falta de un órgano independiente que se ajustara a los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París) y por el hecho de que la vacante de Comisionado Parlamentario siguiera vacante. Recomendó a Dominica que estableciera sin demora una institución nacional de derechos humanos encargada de promover y proteger los derechos humanos, de conformidad con los Principios de París, y que tomara medidas para garantizar que se cubriera sin demora el cargo de Comisionado Parlamentario y asegurar que el mandato se cumpliera con eficacia<sup>8</sup>.

8. El equipo subregional de las Naciones Unidas observó que, en 2021, se había prestado apoyo a la Oficina de Asuntos de Género en el marco del proyecto de Facilitar la Recuperación ante Desastres y la Resiliencia Ambiental y Climática con Perspectiva de Género en el Caribe (EnGenDER) para que llevara a cabo una revisión y actualización de la Política Nacional y el Plan de Acción sobre Equidad e Igualdad de Género para 2014-2024, y que la versión actualizada aún estaba pendiente de aprobación<sup>9</sup>.

### IV. Promoción y protección de los derechos humanos

#### A. Cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, teniendo en cuenta el derecho internacional humanitario aplicable

##### 1. Igualdad y no discriminación

9. El Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación por la falta de legislación amplia contra la discriminación que abarcara todos los motivos prohibidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y por la falta de información sobre si existían planes para elaborar esas disposiciones jurídicas. Recomendó a Dominica que proporcionara una protección plena y efectiva contra la discriminación en todos los ámbitos, tanto públicos como privados, y prohibiera la discriminación directa e indirecta; promulgara legislación que contuviera una lista exhaustiva de los motivos de discriminación, de conformidad con el Pacto; y proporcionara un mecanismo de denuncia y recursos eficaces y accesibles para todas las formas de discriminación y recopilara datos desglosados sobre dichas denuncias y sus resultados<sup>10</sup>.

10. El equipo subregional de las Naciones Unidas señaló que, en 2023, Dominica había elegido por primera vez a una mujer, de ascendencia indígena además, para ocupar la Presidencia<sup>11</sup>.

##### 2. Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona, y a no ser sometido a tortura

11. El Comité celebró que Dominica aplicara una moratoria *de facto* sobre la pena de muerte, y encomió sus medidas recientes que ponían de manifiesto su adhesión a la idea de una moratoria total, pero expresó su preocupación por el hecho de que siguiera vigente el artículo 5 de la Ley del Derecho y el Procedimiento Penal, que permitía la ejecución en la

horca en casos de asesinato. El Comité recomendó que Dominica considerara la posibilidad de revisar el artículo 5 de la Ley del Derecho y el Procedimiento Penal; prosiguiera su labor encaminada a facilitar un diálogo social sobre el derecho a la vida amparado por el artículo 6 del Pacto; y ratificara el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte<sup>12</sup>.

12. El Comité consideraba preocupante que la Constitución permitiera el uso de la fuerza letal para la defensa de la propiedad. Expresó además su preocupación por las denuncias de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, en particular durante las protestas que tuvieron lugar en Roseau en 2017. Recomendó a Dominica que revisara la legislación y las políticas relativas al uso de la fuerza por los agentes de la autoridad, en particular las disposiciones que permitían el uso de la fuerza letal para la protección de la propiedad, teniendo debidamente en cuenta la observación general núm. 36 (2018) del Comité, relativa al derecho a la vida, y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. El Comité recomendó asimismo a Dominica que impartiera formación a los agentes de la autoridad sobre sus responsabilidades en materia de derechos humanos y estableciera mecanismos para someter a seguimiento y medir la eficacia de esa formación y actualizarla en consecuencia<sup>13</sup>.

13. El Comité se mostró preocupado ante la elevada proporción de personas en prisión preventiva y la duración excesiva de esa medida en algunos casos. Recomendó a Dominica que atajara el recurso excesivo a la prisión preventiva. También le recomendó que redujera la duración de la prisión preventiva, acelerara la promulgación de la Ley de Libertad bajo Fianza, que establecía normas de procedimiento para la tramitación de los casos, y desarrollara el uso de medidas alternativas a la privación de libertad, teniendo en cuenta sus obligaciones dimanantes del Pacto, según la interpretación del Comité en su observación general núm. 35 (2014), relativa a la libertad y la seguridad personales, y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio)<sup>14</sup>.

### **3. Administración de justicia, incluida la lucha contra la impunidad, y estado de derecho**

14. El Comité tomó nota de los efectos de los desastres naturales en la capacidad de Dominica, incluidas las repercusiones para el poder judicial, y de los esfuerzos legislativos para reducir el número de casos atrasados mediante la Ley de Libertad bajo Fianza. Sin embargo, le seguía preocupando la persistencia de un elevado número de causas pendientes y largas demoras en los juicios<sup>15</sup>.

15. El equipo subregional de las Naciones Unidas señaló que, en 2020, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) había realizado una evaluación regional del sistema de justicia en nueve países del Caribe, entre los que se encontraba Dominica. Algunos de los problemas detectados eran la falta de datos para llevar a cabo evaluaciones nacionales y la acumulación de casos pendientes, sobre todo en la división penal. Según ese análisis, el uso excesivo de la prisión preventiva, en violación de las garantías procesales, había contribuido al volumen de trabajo atrasado, que obedecía, entre otras cosas, a la falta de sistemas integrados de comunicaciones y tecnología, motivo por el cual el seguimiento de los casos y expedientes en todo el sistema judicial se basaba en documentación en papel. La infraestructura y la digitalización representaban un reto crucial para Dominica<sup>16</sup>.

16. El Comité recomendó a Dominica que pusiera en práctica de forma efectiva sus planes para aumentar la capacidad del sistema judicial e intensificara las medidas encaminadas a reducir el número de causas pendientes ante los tribunales y la fiscalía, así como el tiempo de espera en cada caso<sup>17</sup>.

17. El Comité acogió con satisfacción los esfuerzos realizados por Dominica para proporcionar asistencia jurídica, pero observó con preocupación que su capacidad tal vez no bastase para proporcionar un abogado a todos los acusados. El Comité lamentó que Dominica no hubiera facilitado suficiente información sobre las medidas adoptadas para garantizar en mayor medida la independencia e imparcialidad del poder judicial y le recomendó que aumentara la capacidad del servicio de asistencia jurídica y adoptara todas las medidas necesarias para garantizar la independencia e imparcialidad del poder judicial<sup>18</sup>.

18. El equipo subregional de las Naciones Unidas señaló que, según el PNUD, en 2017 el huracán María había destruido el Tribunal Penal y otras oficinas de la administración del Estado, lo que ponía de relieve la necesidad urgente de realizar una transición completa a los registros electrónicos y mejorar la resiliencia en el poder judicial a fin de garantizar el acceso a la justicia después de un desastre<sup>19</sup>.

19. El Comité recomendó a Dominica que se asegurase de que existieran mecanismos de denuncia accesibles y mecanismos de supervisión independientes, que todas las denuncias de violencia se investigaran exhaustivamente y que, cuando procediera, esas investigaciones dieran lugar a la imposición de penas proporcionales; y que ofreciera medidas de reparación adecuadas a las víctimas de la violencia policial, incluidas indemnizaciones y garantías de no repetición<sup>20</sup>.

20. Según el equipo subregional de las Naciones Unidas, una evaluación realizada en 2017 por la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) sobre el sistema de justicia juvenil en Dominica reveló la necesidad urgente de reformar la legislación que regía la administración de la justicia juvenil. La Ley de la Infancia y la Juventud no respondía eficazmente a todas las necesidades de los jóvenes infractores. Faltaban servicios esenciales, por ejemplo libertad condicional, intervenciones psicosociales, programas de educación y formación profesional y servicios de asistencia jurídica. El equipo subregional de las Naciones Unidas indicó además que se había previsto aprobar un nuevo proyecto de ley de justicia juvenil en 2024, pero que, hasta que se derogara la Ley de la Infancia y la Juventud, Dominica mantendría disposiciones legislativas que autorizaban la flagelación de niños y la imposición de la cadena perpetua a niños. Además, las instalaciones de la Operación Terremoto Juvenil no estaban pensadas como centro de menores, sino que acogían a niños acusados de delitos porque la otra alternativa era la cárcel<sup>21</sup>.

21. Al Comité le preocupaba que la edad de responsabilidad penal de los niños fuera baja, que no se separara a los adultos y los niños privados de libertad y que los niños pudieran ser condenados a cadena perpetua. Toma nota de que Dominica había indicado que tenía la intención de reformar el sistema de justicia juvenil, entre otras cosas mediante la prohibición de condenar a los niños a cadena perpetua prevista en el proyecto de ley de justicia juvenil, pero veía con preocupación las lagunas existentes en la protección de los niños en conflicto con la ley<sup>22</sup>.

22. El Comité recomendó a Dominica que velara por que su sistema de justicia juvenil respetara los derechos enunciados en el Pacto y en otros instrumentos internacionales; introdujera reformas legislativas, entre ellas la revisión de las disposiciones que permitían condenar a niños a cadena perpetua, el establecimiento de límites a la duración de las penas de prisión que podían dictarse contra un niño y el aumento de la edad de responsabilidad penal; velara por que los niños en conflicto con la ley fueran tratados de un modo que favoreciera su integración en la sociedad; y observara el principio de que la privación de libertad de un niño debía constituir una medida de último recurso, y que los niños privados de libertad debían estar separados de los reclusos adultos<sup>23</sup>.

#### **4. Libertades fundamentales y derecho a participar en la vida pública y política**

23. Según el equipo subregional de las Naciones Unidas, la libertad de reunión y la libertad de expresión estaban amparadas por la Constitución, y solían respetarse. Sin embargo, en ocasiones las protestas se tornaban violentas o propiciaban saqueos o actos de vandalismo, y los opositores políticos al Gobierno han sido acusados de incitación y obstrucción<sup>24</sup>.

24. El Comité tomó nota de la información de Dominica de que las disposiciones que tipificaban como delito la difamación no se habían aplicado en la práctica recientemente y que esas disposiciones serían revisadas durante la labor nacional de reforma legislativa. No obstante, indicó que le preocupaba que la difamación siguiera estando tipificada como delito en la Ley de Libelo y Calumnia de 1979, con penas de hasta dos años de prisión o una multa. Le preocupaba asimismo que esas disposiciones desproporcionadamente punitivas y la amenaza de demandas judiciales pudieran tener un efecto disuasorio en el ejercicio de la libertad de expresión por parte de la población general, los partidos políticos y los medios de

comunicación. El Comité también expresó su preocupación por el hecho de que, en lo que respectaba a las reuniones pacíficas, Dominica tuviera un sistema que requiriera una autorización previa y que, según la información recibida, se habían denegado permisos para celebrar reuniones pacíficas relacionadas con las actividades de los partidos de la oposición<sup>25</sup>.

25. El equipo subregional de las Naciones Unidas indicó que la prensa era generalmente libre en la práctica. Sin embargo, el Gobierno recurría con frecuencia a las demandas por difamación y las amenazas de demandas contra los medios de comunicación, lo que generaba cierto grado de autocensura. Además, en julio de 2022, la Corte de Justicia del Caribe denunció que se había restringido el acceso de la oposición a algunos medios de comunicación estatales, entre ellos la emisora de radio nacional<sup>26</sup>. El Comité recomendó a Dominica que se cerciorara de que todas las disposiciones de su legislación fueran conformes con el artículo 19 del Pacto y, mientras tanto, se asegurara de que no se encarcelara a nadie por difamación. Le recomendó además que considerara la posibilidad de modificar la Ley de Orden Público de 1954 de modo que esta exigiera, como máximo, una notificación previa de las reuniones pacíficas<sup>27</sup>.

26. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) recomendó a Dominica que se dotara de legislación sobre la libertad de información y creara una institución de supervisión independiente competente para aplicar la legislación sobre acceso a la información, de acuerdo con las normas internacionales, y para lograr progresos en relación con la meta 16.10 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, relativa al acceso público a la información y las libertades fundamentales<sup>28</sup>.

27. La UNESCO señaló que no había registrado ningún asesinato de periodistas en Dominica desde 2006, año en que comenzaron las denuncias sistemáticas<sup>29</sup>.

28. El equipo subregional de las Naciones Unidas comunicó que los observadores, incluidas las misiones internacionales de la Comunidad del Caribe, la Organización de los Estados Americanos y el Commonwealth, habían destacado el desarrollo pacífico de las elecciones generales celebradas en 2022, pero habían señalado la necesidad de una reforma electoral. Añadió que, a principios de 2022, la Corte de Justicia del Caribe también había observado algunas esferas de preocupación en las elecciones celebradas, aunque había desestimado una causa del partido de la oposición denominado Partido Unido de los Trabajadores impugnando los resultados de las elecciones de 2019<sup>30</sup>.

29. El Comité estaba preocupado por las importantes disparidades entre el tamaño de los distritos electorales y por la frecuencia con la que, al parecer, se acusaba por la vía penal a miembros de los partidos de la oposición por lo que parecían ser actividades relacionadas con su participación en los asuntos públicos. Recomendó a Dominica que se dotara de un sistema electoral que garantizara a todos los ciudadanos la igualdad en el disfrute de sus derechos, de conformidad con el Pacto y, para ello, debía, entre otras cosas, velar por la transparencia plena de las elecciones y el pluralismo de la vida política, abstenerse de utilizar las disposiciones del derecho penal para limitar el derecho de los partidos de la oposición a participar en los asuntos públicos, e investigar toda denuncia de irregularidades<sup>31</sup>.

## **5. Prohibición de todas las formas de esclavitud, incluida la trata de personas**

30. El Comité acogió con satisfacción los esfuerzos realizados por Dominica contra la trata de personas, en particular tipificando como delito esas prácticas y estableciendo penas proporcionales a la gravedad del delito. Sin embargo, expresó su preocupación por la falta de información sobre las investigaciones iniciadas, los procesamiento incoados y las condenas dictadas contra quienes se dedicaban a actividades de trata, y sobre el apoyo puesto a disposición de las víctimas<sup>32</sup>.

## **6. Derecho a trabajar y a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias**

31. El equipo subregional de las Naciones Unidas observó que la legislación vigente no abordaba las prácticas de contratación y promoción profesional discriminatorias<sup>33</sup>.

32. La UNESCO recomendó a Dominica que modificara su legislación a fin de armonizar la edad legal de admisión al trabajo en las distintas leyes, como la Ley de Educación y la Ley

del Matrimonio, y velara por que estuviera en consonancia con la finalización de la enseñanza obligatoria<sup>34</sup>.

## **7. Derecho a la seguridad social**

33. El equipo subregional de las Naciones Unidas observó que recientemente se habían elaborado una política y una estrategia de protección social que estaban pendientes de aprobación por el Consejo de Ministros. Se preveía que la nueva política contribuyera a orientar mejor la asistencia social y fomentara un mayor alcance, ampliara la cobertura de los regímenes de seguridad social y mejorara el acceso a la formación personalizada y al apoyo a la pequeña empresa<sup>35</sup>.

## **8. Derecho a un nivel de vida adecuado**

34. Según el equipo subregional de las Naciones Unidas, el elevado coste de la vida y la inseguridad alimentaria seguían suscitando gran preocupación tras la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19)<sup>36</sup>.

35. El equipo subregional de las Naciones Unidas indicó que las crisis acumuladas en los últimos años habían interferido en los avances hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aunque se disponía de pocos datos sobre los progresos hacia el logro de los Objetivos, no cabía duda de que los progresos se habían estancado en lo que se refería a las metas relativas al hambre, la educación de calidad, la energía limpia y la paz, la justicia e instituciones sólidas. Persistían algunos problemas relacionados con los sistemas de gestión del agua y los desechos, la inseguridad alimentaria, el aumento del número de casos de enfermedades no transmisibles y los problemas de salud mental<sup>37</sup>.

36. El equipo subregional de las Naciones Unidas indicó que, en Dominica, el 95,42 % de los hogares tenían un acceso básico al agua. Las disparidades en el acceso podrían ser mayores en las zonas rurales, donde las infraestructuras eran insuficientes y la calidad del agua podía verse comprometida por la escorrentía de tierras agrícolas y la erosión. En relación con el saneamiento, preocupaba el hecho de que aproximadamente el 15 % de la población siguiera careciendo de instalaciones mejoradas y de que se mantuviera la práctica de la defecación al aire libre<sup>38</sup>.

37. Según el equipo subregional de Naciones Unidas, reconstruir las viviendas y hacerlo a prueba de huracanes había sido una prioridad del Gobierno desde el paso del huracán María en 2017. Muchas familias cuyas viviendas habían resultado dañadas o destruidas no disponían de recursos suficientes para reconstruirlas o repararlas<sup>39</sup>.

## **9. Derecho a la salud**

38. El equipo subregional de las Naciones Unidas mencionó que, en virtud del artículo 8 de la Ley de Delitos contra la Persona, el aborto solo se permitía en Dominica cuando la vida de la embarazada corría peligro. No se permitía explícitamente el aborto a petición de la interesada en casos de violación o incesto, para proteger la salud mental o física de la mujer, por razones económicas o sociales o en casos de malformación del feto. En virtud de los artículos 56 y 57 de la ley, las personas que administraran fármacos o utilizaran instrumentos con el fin de provocar un aborto podían ser condenadas a penas de diez años de prisión, mientras que aquellas que adquirieran fármacos o instrumentos para provocar un aborto podían ser condenadas a dos años de prisión<sup>40</sup>.

39. El Comité expresó su preocupación por el hecho de que las restricciones vigentes podían obligar a las mujeres y las niñas que deseaban abortar a hacerlo en condiciones de riesgo que pusieran en peligro su vida y su salud. Recomendó a Dominica que modificara su legislación para garantizar el acceso sin riesgos, legal y efectivo al aborto cuando la vida o la salud de la mujer o niña embarazada estuvieran en peligro, y cuando llevar a término el embarazo pudiera ocasionar un daño o sufrimiento considerables a la mujer o niña embarazada, especialmente en los casos en que el embarazo fuera el resultado de una violación o acto de incesto o cuando no fuera viable; y velara por que las mujeres y niñas que recurrieran al aborto y los médicos que les prestaran asistencia no fueran objeto de sanciones penales, pues la existencia de tales sanciones obligaba a las mujeres y niñas a abortar en condiciones de riesgo<sup>41</sup>.

40. El Comité dijo estar preocupado por que el nivel de mortalidad de niños menores de un año en Dominica era elevado e iba en aumento, y por la falta de información concreta sobre las medidas adoptadas para hacer frente a la fuerte tasa de mortalidad de niños menores de un año. Recomendó a Dominica que adoptara sin demora todas las medidas necesarias para reducir la mortalidad de los niños menores de un año<sup>42</sup>.

41. El equipo subregional de las Naciones Unidas señaló que los progresos realizados en materia de salud sexual y reproductiva eran encomiables. Sin embargo, expresó su preocupación por el limitado acceso de los adolescentes a servicios integrales de salud sexual y reproductiva a causa de barreras jurídicas. El hecho de que la edad mínima de consentimiento sexual (16 años) fuera inferior a la edad mínima de acceso a los servicios sexuales y reproductivos sin el consentimiento de los padres (18 años) suponía un reto para los adolescentes sexualmente activos que deseaban información y servicios sin que lo supieran sus padres o tutores. El equipo subregional de las Naciones Unidas reconoció los esfuerzos que estaba realizando el Gobierno para elaborar normas sobre servicios de atención sanitaria de calidad para adolescentes y una política de salud sexual y reproductiva, y señaló que el Fondo de Población de las Naciones Unidas había instado a Dominica a llevar adelante esas iniciativas de política fundamentales<sup>43</sup>.

## **10. Derecho a la educación**

42. La UNESCO señaló que la Constitución no consagraba el derecho a la educación y que no se había encontrado ninguna disposición legislativa que prohibiera la discriminación en la educación. La Ley de Educación establecía que todas las personas tenían derecho a recibir un programa educativo, pero dependía de los recursos disponibles, lo que significaba que el derecho a la educación no estaba plenamente garantizado. Según la Ley de Educación y el Reglamento de Educación de 2011, podrían imponerse tasas<sup>44</sup>.

43. La UNESCO recomendó a Dominica que consagrara en su Constitución el derecho de todas las personas a la educación, sin discriminación alguna; modificara la legislación para garantizar al menos 12 años de educación gratuita; y redoblara los esfuerzos para mejorar los niveles de matriculación, especialmente en la enseñanza preescolar y secundaria<sup>45</sup>.

## **11. Desarrollo, medio ambiente y derechos humanos**

44. El equipo subregional de las Naciones Unidas señaló que Dominica había anunciado su intención de convertirse en la primera nación resistente al clima del mundo, y había preparado la Estrategia de Resiliencia ante Desastres, un plan integral que incluía políticas, costos y financiación para aumentar la resiliencia ante futuros desastres naturales<sup>46</sup>.

45. El equipo subregional de las Naciones Unidas observó que, el 22 de abril de 2024, Dominica había ratificado el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), un instrumento que contemplaba los derechos de acceso a la información y la participación pública en la adopción de decisiones relativas al medio ambiente, la justicia y un medio ambiente saludable y sostenible para las generaciones actuales y futuras<sup>47</sup>.

46. El equipo subregional de las Naciones Unidas indicó que Dominica había publicado tres documentos clave, conformes con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para alcanzar su visión de convertirse en la primera nación resiliente al clima del mundo: la Estrategia Nacional de Fomento de la Resiliencia, el Plan de Resiliencia al Clima y Recuperación para 2020-2030 y la Estrategia de Financiación para Afrontar el Riesgo de Desastres<sup>48</sup>. El PNUD mencionó la importancia de crear una economía resistente al clima que ofreciera un futuro seguro a todos los residentes de Dominica, y de supervisar los avances hacia las metas acordadas para el objetivo de política del Estado en materia de economía azul<sup>49</sup>.

47. El Comité acogió con satisfacción el empeño de Dominica, como pequeño Estado insular particularmente vulnerable al cambio climático, por adoptar medidas de adaptación y mitigación y tomó nota de las considerables dificultades que ello entrañaba. Le recomendó que prosiguiera y ampliara sus encomiables esfuerzos por aumentar su resiliencia frente al cambio climático mediante medidas de adaptación y mitigación y que todos los proyectos

que incidieran en el desarrollo sostenible y la resiliencia frente al cambio climático se diseñaran con la participación verdadera e informada de la población<sup>50</sup>.

## **B. Derechos de personas o grupos específicos**

### **1. Mujeres**

48. El equipo subregional de las Naciones Unidas indicó que, en 2023, se habían aprobado varias leyes importantes para proteger a las mujeres y los niños. Entre ellas destacaba la Ley de Lucha contra la Violencia Doméstica (Ley núm. 14 de 2023), que entró en vigor en julio de 2023 y proporcionaría mayor protección a las víctimas de la violencia doméstica, entre otras cosas con disposiciones para la emisión de órdenes de protección<sup>51</sup>.

49. El Comité acogió con beneplácito las medidas adoptadas para proteger a las mujeres de la violencia, incluida la tipificación como delito de la violación conyugal en la Ley de Delitos Sexuales (Modificación) de 2016, la elaboración de la Ley de Protección contra la Violencia Doméstica de 2001 y los programas para prevenir este tipo de violencia. No obstante, expresó su preocupación por la falta de información sobre el número de casos de violencia contra la mujer, el procesamiento de los agresores, las condenas y sanciones impuestas, la falta de acceso de las víctimas a la justicia y a medidas de rehabilitación, y el hecho de que en la legislación siguiera sin considerarse delito el acoso sexual<sup>52</sup>.

50. El Comité recomendó a Dominica que modificara sus leyes de modo que ofrecieran a las mujeres una protección adecuada frente a todas las formas de violencia contra ellas, incluido el acoso sexual; alentara a las víctimas a que denunciaran los delitos y asegurara que los casos de violencia contra la mujer se investigaran a fondo, que los agresores fueran procesados y condenados y que las víctimas tuvieran acceso a recursos efectivos; velara por que las víctimas de la violencia doméstica o sexual recibieran una asistencia jurídica, médica y psicológica apropiada, y mejorara los servicios y mecanismos de apoyo a las víctimas; y recopilara datos completos sobre la incidencia de la violencia contra la mujer<sup>53</sup>.

51. El equipo subregional de las Naciones Unidas observó que en la Ley de Protección contra la Violencia Doméstica no se definía el “consentimiento”; que la violación se describía en ella utilizando una terminología neutra en cuanto al género; que la violación dentro del matrimonio solo era delito si se utilizaba la fuerza o la amenaza de fuerza, o se habían consumido drogas, a diferencia de la violación fuera del matrimonio; y que la violación dentro del matrimonio conllevaba una pena menor (14 años) que la violación fuera del matrimonio (25 años)<sup>54</sup>.

52. El equipo subregional de las Naciones Unidas también advirtió que los delitos sexuales se abordaban en la Ley de Delitos Sexuales (Modificación), y que todos los delitos enunciados en esa ley eran neutros en cuanto al género. Dominica carecía de un plan de acción estratégico nacional para reducir la violencia de género y de legislación sobre acoso sexual<sup>55</sup>.

53. El Comité encomió las medidas adoptadas por Dominica para promover la igualdad de género, los datos sobre la presencia de mujeres en puestos de alta responsabilidad tanto en el sector público como en el privado, el acceso a la educación en todos los niveles y los notables progresos con respecto a la inclusión de mujeres candidatas en las elecciones parlamentarias de 2019. Sin embargo, expresó su preocupación por el hecho de que persistiera una representación insuficiente de las mujeres y de que no se dispusiera de información sobre las medidas adoptadas para garantizar la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor y para erradicar los estereotipos sobre el papel de la mujer y el hombre en la familia y en la sociedad<sup>56</sup>.

54. El Comité recomendó a Dominica que promulgara una legislación amplia que ofreciera una protección eficaz frente a la discriminación por motivos de género; continuara e intensificara los esfuerzos para asegurar la representación de la mujer en los puestos públicos y privados de alto nivel y en el Parlamento nacional; intensificara sus esfuerzos para eliminar la disparidad salarial por razón de género, corrigiendo para ello las diferencias en la remuneración de hombres y mujeres por un trabajo de igual valor; reforzara las iniciativas de educación y sensibilización de la población para eliminar los estereotipos de género y



promoviera el respeto por las funciones y responsabilidades iguales de las mujeres y los hombres en la familia y en la sociedad<sup>57</sup>.

55. Según el equipo subregional de las Naciones Unidas, los datos para evaluar las brechas de género en Dominica eran escasos y estaban desfasados, y Dominica no compilaba datos oportunos y razonablemente precisos sobre la violencia de género ni había priorizado la realización de un estudio sobre la prevalencia de la violencia de género<sup>58</sup>. El Comité recomendó a Dominica que reuniera datos completos para someter a seguimiento la eficacia de las iniciativas encaminadas a lograr la igualdad de género<sup>59</sup>.

## 2. Niños

56. El Comité expresó su preocupación acerca de las noticias de niños que trabajaban y la información de que las disposiciones legislativas no prohibían todas las formas de explotación infantil, entre ellas la utilización de niños en la prostitución, la pornografía o las actividades ilícitas, incluido el tráfico de drogas, y no estaban en plena conformidad con las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)<sup>60</sup>.

57. El Comité recomendó a Dominica que considerara la posibilidad de intensificar los esfuerzos para prevenir la trata y el trabajo infantil; reforzara el marco jurídico que protegía a los niños frente a todas las formas de explotación, entre otras cosas promulgando los proyectos de ley destinados a reforzar el sistema de protección de la infancia, armonizando plenamente la legislación con los convenios pertinentes de la OIT y prohibiendo expresamente la utilización de niños en la prostitución, la pornografía o las actividades ilícitas, incluido el tráfico de drogas; investigara pronta y exhaustivamente todos los casos de trata, iniciara acciones judiciales contra los presuntos autores y, si resultaban condenados, se les impusieran sanciones adecuadas y disuasorias; y se asegurara de que las víctimas de todas las formas de explotación tuvieran acceso a medios de protección y servicios de asistencia eficaces y adaptados a su edad, y a una reparación integral, que incluyera la rehabilitación y una indemnización adecuada<sup>61</sup>.

58. El equipo subregional de las Naciones Unidas señaló que se habían promulgado las siguientes leyes en relación con los niños: Ley sobre la Condición de Niño (Ley núm. 10 de 2023), Ley de Manutención de los Hijos (Ley núm. 11 de 2023), Ley de Cuidados Infantiles y Adopción de Niños (Ley núm. 12 de 2023) y Ley de Pensión Alimenticia (Ley núm. 13 de 2023)<sup>62</sup>. Destacó que la nueva Ley de Cuidados Infantiles y Adopción de Niños se había aprobado con el fin de remediar muchos de los problemas observados durante la evaluación del sistema de justicia infantil realizada por la OECO y el UNICEF en 2017, y establecía medidas sobre: los períodos prolongados en servicios de acogida oficiales; el escaso recurso a la adopción; la falta de exámenes de la situación para hacer un seguimiento del progreso de los niños en materia de rehabilitación y reintegración; la colaboración insuficiente entre el ministerio competente y los centros de acogida; la falta de colaboración con las familias de los niños acogidos, con miras a reforzar el entorno familiar al que se esperaba que volvieran los niños; la supervisión deficiente de los servicios de protección de la infancia y la ausencia de procedimientos de denuncia establecidos; y la inexistencia de manuales o directrices escritas para orientar las prácticas y procedimientos de protección de la infancia<sup>63</sup>.

59. El equipo subregional de las Naciones Unidas indicó que el maltrato infantil estaba prohibido por ley, pero que este seguía siendo un problema generalizado. Los niños y niñas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales corrían un riesgo especial de sufrir maltrato. A menudo se exigía a los niños que declarasen directamente ante el tribunal contra las personas que los habían maltratado, que también estaban presentes físicamente, en lugar de prestar testimonio pregrabado desde entornos más privados y seguros. Además, a veces los casos pasaban años en el sistema judicial y los niños tenían que participar reiteradamente en audiencias. No existían listas públicas de infractores. Los defensores sostuvieron que el sistema judicial desalentaba la persecución del maltrato infantil<sup>64</sup>. La UNESCO señaló que, según la Ley del Matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio para las niñas era de 18 años. Existían excepciones que les permitían casarse antes de los 18 años con el consentimiento de sus padres, pero no antes de los 16 años. Por ello, la UNESCO recomendó a Dominica que suprimiera las excepciones a la edad mínima para contraer matrimonio<sup>65</sup>.

60. El Comité expresó su preocupación por el hecho de que los castigos corporales todavía no estuvieran expresamente prohibidos en el hogar, en los servicios de guardería y otros entornos de cuidado alternativo y en los establecimientos penitenciarios. Recomendó a Dominica que prohibiera expresamente los castigos corporales en todos los entornos<sup>66</sup>. La UNESCO recomendó a Dominica que prohibiera los castigos corporales en todos los ámbitos educativos<sup>67</sup>.

### 3. Personas con discapacidad

61. El equipo subregional de las Naciones Unidas subrayó que la legislación de Dominica no prohibía específicamente la discriminación contra las personas con discapacidad, pero que había denuncias por discriminación en relación con las oportunidades de empleo. La accesibilidad física era preocupante: pocos edificios, incluidos los públicos, eran accesibles para las personas con discapacidad física<sup>68</sup>.

62. El equipo subregional de las Naciones Unidas señaló que un problema habitual era la falta de instalaciones y servicios de justicia accesibles, lo que propiciaba la exclusión de la protección y los recursos, e indicó que era indispensable construir instalaciones teniendo en cuenta las limitaciones en materia de accesibilidad<sup>69</sup>.

63. El equipo subregional de las Naciones Unidas reconoció que los niños con discapacidad física, auditiva y visual estaban integrados en las escuelas ordinarias, y que el Gobierno proporcionaba ayudas para sufragar el costo de la educación en escuelas privadas segregadas para niños con discapacidad intelectual o psicosocial. Sin embargo, el equipo subregional de las Naciones Unidas también hizo hincapié en la necesidad de seguir transformando los sistemas e impartiendo capacitación profesional para apoyar a los niños<sup>70</sup>.

### 4. Pueblos Indígenas

64. El Comité acogió con agrado los esfuerzos realizados para promover los derechos de los Pueblos Indígenas, incluida la designación de un ministerio dedicado a esta cuestión, la elaboración de programas de educación y vivienda y la prestación de apoyo a las empresas indígenas. Sin embargo, observó que no se disponía de información detallada sobre los marcos jurídicos y de políticas que regían la propiedad y el uso de las tierras indígenas ni sobre las medidas adoptadas para defender sistemáticamente el derecho de los Pueblos Indígenas a ser consultados previamente y de manera informada y libre en relación con los programas que los afectaban<sup>71</sup>.

65. El equipo subregional de las Naciones Unidas observó que, mientras que la tasa de pobreza general en Dominica se estimaba en el 28,8 %, la tasa de pobreza del Pueblo Indígena kalinago se estimaba en el doble, esto es, en el 49,8 %<sup>72</sup>.

66. El Comité recomendó a Dominica que considerara la posibilidad de continuar y ampliar las medidas de promoción de los derechos de los Pueblos Indígenas; promulgara una legislación amplia de lucha contra la discriminación que ofreciera protección frente a la discriminación basada en la condición de indígena; y asegurara que se consultara verdaderamente con los Pueblos Indígenas afectados con miras a obtener su consentimiento libre, previo e informado en relación con la adopción o aplicación de cualquier medida que pudiera incidir de manera sustancial en su modo de vida y su cultura<sup>73</sup>.

67. El equipo subregional de las Naciones Unidas refirió que, en 2022, en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente, Modernización Rural y Asuntos de los Kalinagos, el proyecto EnGenDER había respaldado la elaboración de una evaluación exhaustiva de los medios de subsistencia de la población indígena. La evaluación tenía como objetivo abordar las vulnerabilidades derivadas de los efectos del cambio climático y encontrar soluciones para mejorar la resiliencia y reforzar sus medios de subsistencia<sup>74</sup>.

### 5. Personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales

68. El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) celebró la decisión del Tribunal Superior de Dominica de 22 de abril de 2024 de proteger los derechos de las personas LGBTQ en el país. El Tribunal dictaminó que los artículos 14 y 16 de la Ley de Delitos Sexuales (Ley núm. 1 de 1998), que tipificaban como delito las relaciones sexuales

consentidas entre adultos del mismo sexo, eran inconstitucionales y violaban el derecho a la libertad, la libertad de expresión y la protección de la intimidad personal<sup>75</sup>.

69. Al Comité le preocupaba profundamente que la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género no estuviera prohibida por ley en Dominica y que las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo siguieran estando tipificadas como delito en la Ley de Delitos Sexuales, con sanciones que incluían penas de prisión de hasta 25 años y el tratamiento psiquiátrico forzoso. Recomendó a Dominica que adoptara las medidas apropiadas para combatir las actitudes que discriminaban y estigmatizaban a las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero, entre otras cosas mediante amplias actividades de concienciación; y que aprobara una legislación integral que protegiera plena y eficazmente contra la discriminación en todos los ámbitos y que contuviera una lista completa de los motivos de discriminación, como la orientación sexual y la identidad de género<sup>76</sup>.

## 6. Migrantes, refugiados y solicitantes de asilo

70. El Comité expresó su preocupación por el hecho de que Dominica no dispusiera de una legislación que garantizara los derechos de los no ciudadanos, incluidos los refugiados y los solicitantes de asilo. También observó que no se disponía de información sobre el número de refugiados y solicitantes de asilo en el país. El Comité recomendó a Dominica que velara por que todas las personas que solicitaran protección internacional tuvieran acceso a un procedimiento justo y eficaz de determinación de la condición de refugiado, independientemente de su país de origen, y recibieran un trato adecuado y justo en todas las fases del proceso, de conformidad con lo dispuesto en el Pacto; recopilara y publicara datos sobre la situación de los refugiados y solicitantes de asilo en el territorio de Dominica; y promulgara sin demora disposiciones legislativas que garantizaran los derechos de los extranjeros, incluidos los refugiados y los solicitantes de asilo, de conformidad con las obligaciones contraídas en virtud del Pacto y de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados<sup>77</sup>.

## 7. Apátridas

71. El Comité recomendó a Dominica que recopilara y publicara datos sobre la situación de los apátridas en el territorio nacional; y que estudiara la posibilidad de ratificar o adherirse a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y a la Convención para Reducir los Casos de Apatridia<sup>78</sup>.

### Notas

<sup>1</sup> [A/HRC/42/9](#), [A/HRC/42/9/Add.1](#) and [A/HRC/42/2](#).

<sup>2</sup> [CCPR/C/DMA/COAR/1](#), para. 7.

<sup>3</sup> Submission by the United Nations Subregional Team for Barbados and the Organization of Eastern Caribbean States for the universal periodic review of Dominica, para. 7.

<sup>4</sup> [CCPR/C/DMA/COAR/1](#), para. 37.

<sup>5</sup> *Ibid.*, paras. 1, 3 and 5. See also [CCPR/C/DMA/Q/1/Add.1](#) and [CCPR/C/DMA/RQAR/1](#).

<sup>6</sup> United Nations subregional team submission, para. 11. See also [CRC/C/8/Add.48](#).

<sup>7</sup> United Nations subregional team submission, para. 13.

<sup>8</sup> [CCPR/C/DMA/COAR/1](#), paras. 10 and 11.

<sup>9</sup> United Nations subregional team submission, para. 23.

<sup>10</sup> [CCPR/C/DMA/COAR/1](#), paras. 12 and 13 (a)–(c).

<sup>11</sup> United Nations subregional team submission, para. 6.

<sup>12</sup> [CCPR/C/DMA/COAR/1](#), paras. 26 and 27.

<sup>13</sup> *Ibid.*, paras. 28 and 29 (a) and (b).

<sup>14</sup> *Ibid.*, paras. 30 and 31.

<sup>15</sup> *Ibid.*, paras. 30 and 39.

<sup>16</sup> United Nations subregional team submission, paras. 24 and 25. See also UNDP, *Caribbean Justice: A Needs Assessment of the Judicial System in Nine Countries* (Panama City, 2020).

<sup>17</sup> [CCPR/C/DMA/COAR/1](#), para. 40.

<sup>18</sup> *Ibid.*, paras. 39 and 40.

<sup>19</sup> United Nations subregional team submission, para. 25. See also UNDP, *Caribbean Justice*, pp. 66 and 67.

- 20 [CCPR/C/DMA/COAR/1](#), para. 29 (c) and (d).
- 21 United Nations subregional team submission, para. 27.
- 22 [CCPR/C/DMA/COAR/1](#), para. 35.
- 23 *Ibid.*, para. 36.
- 24 United Nations subregional team submission, para. 63.
- 25 [CCPR/C/DMA/COAR/1](#), para. 41.
- 26 United Nations subregional team submission, para. 64.
- 27 [CCPR/C/DMA/COAR/1](#), para. 42.
- 28 UNESCO submission for the universal periodic review of Dominica, para. 25.
- 29 *Ibid.*, para. 13.
- 30 United Nations subregional team submission, para. 5.
- 31 [CCPR/C/DMA/COAR/1](#), paras. 45 and 46.
- 32 *Ibid.*, para. 32; see also paras. 3 and 6.
- 33 United Nations subregional team submission, para. 45.
- 34 UNESCO submission, para. 19.
- 35 United Nations subregional team submission, para. 33.
- 36 *Ibid.*, para. 29.
- 37 *Ibid.*, para. 4.
- 38 *Ibid.*, para. 47.
- 39 *Ibid.*, para. 32.
- 40 *Ibid.*, para. 38.
- 41 [CCPR/C/DMA/COAR/1](#), paras. 20 and 21.
- 42 *Ibid.*, paras. 22 and 23.
- 43 United Nations subregional team submission, para. 43.
- 44 UNESCO submission, para. 2.
- 45 *Ibid.*, paras. 15, 16 and 20.
- 46 United Nations subregional team submission, para. 18.
- 47 *Ibid.*, para. 10.
- 48 *Ibid.*, para. 18.
- 49 UNDP, “Blue economy scoping study for Dominica”, Policy Notes, No. 10, 30 November 2021, pp. 7 and 8.
- 50 [CCPR/C/DMA/COAR/1](#), paras. 24 and 25.
- 51 United Nations subregional team submission, para. 14.
- 52 [CCPR/C/DMA/COAR/1](#), paras. 6 (b) and 18.
- 53 *Ibid.*, para. 19.
- 54 United Nations subregional team submission, paras. 51 and 52.
- 55 *Ibid.*, paras. 53 and 54.
- 56 [CCPR/C/DMA/COAR/1](#), para. 16; see also para. 6 (a).
- 57 *Ibid.*, para. 17.
- 58 United Nations subregional team submission, paras. 48 and 49.
- 59 [CCPR/C/DMA/COAR/1](#), para. 17 (e).
- 60 *Ibid.*, para. 33.
- 61 *Ibid.*, para. 34.
- 62 United Nations subregional team submission, para. 14.
- 63 *Ibid.*, para. 58.
- 64 *Ibid.*, paras. 55 and 56.
- 65 UNESCO submission, paras. 3 and 17.
- 66 [CCPR/C/DMA/COAR/1](#), paras. 43 and 44.
- 67 UNESCO submission, para. 18.
- 68 United Nations subregional team submission, para. 59.
- 69 *Ibid.*, para. 26.
- 70 *Ibid.*, para. 60.
- 71 [CCPR/C/DMA/COAR/1](#), para. 47.
- 72 United Nations subregional team submission, para. 1.
- 73 [CCPR/C/DMA/COAR/1](#), para. 48.
- 74 United Nations subregional team submission, para. 19.
- 75 UNAIDS, “UNAIDS welcomes Court’s ruling to protect the rights of LGBTQ people in Dominica”, 22 April 2024. See also United Nations subregional team submission, para. 62.
- 76 [CCPR/C/DMA/COAR/1](#), paras. 14 and 15 (a) and (b).
- 77 *Ibid.*, paras. 37 and 38 (a)–(c).
- 78 *Ibid.*, para. 38 (b) and (d).